

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, marzo 31 de 2022

Auto Interlocutorio No.132

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT.

|             |   |
|-------------|---|
| ACCIÓN:     | REPARACIÓN DIRECTA  |
| EXPEDIENTE: | 76001-33-33-019-2017-00125-01   |
| DEMANDANTE: | JOSE HOBER RODRIGUEZ ALDANA Y OTROS<br><a href="mailto:marthaortiz255@hotmail.com">marthaortiz255@hotmail.com</a> .   |
| DEMANDADO:  | DISTRITO SANTIAGO DE CALI y OTROS<br><a href="mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co">notificacionesjudiciales@cali.gov.co</a><br><a href="mailto:secretariageneral@concejodecali.gov.co">secretariageneral@concejodecali.gov.co</a><br><a href="mailto:gherrera@gha.com.co">gherrera@gha.com.co</a> ,<br><a href="mailto:notificaciones@gha.com.co">notificaciones@gha.com.co</a> y<br><a href="mailto:njudiciales@mapfre.com.co">njudiciales@mapfre.com.co</a> |
| ASUNTO      | APELACIÓN DE AUTO PROFERIDO EN AUDIENCIA QUE DECIDIÓ DECLARAR PROBADA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD – CONFIRMA   |

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso apelación propuesto por la parte demandante contra el auto proferido en audiencia inicial el día 28 de febrero de 2020, por medio del cual el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali decidió declarar probada la excepción de caducidad presentada por los apoderados del Distrito de Santiago de Cali y Mapfre Seguros.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, el señor JOSE HOVER RODRÍGUEZ Y OTROS solicitaron que se resarciera los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado por el Acuerdo 081 de 2001 en el cual suprimió los cargos laborales que venían ostentando la parte actora, este es Motorista de Concejal, el Consejo de Estado en sentencia 27 de abril del 2015 declaró nulo el acto administrativo el Acuerdo 081 de 2001, razón por la cual, la parte actora alega que se le reconozca a título de imputación la “falla en la función pública”, por consiguiente que se le indemnice los perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

A través del auto proferido en audiencia inicial el 28 de febrero de 2020 por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali, se decidió prosperar la excepción de caducidad por las partes demandadas del medio de control objeto de la litis Reparación Directa.

Como sustento de su decisión, el *a-quo* argumentó que el daño que se le causó al señor José Hover Rodríguez Aldana no surge a partir de la decisión emitida por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino desde el momento en que se le notificó la decisión que se adoptó en el Acuerdo No. 081 del 19 de abril de 2001, relativo a su desvinculación, esto es, del 10 de julio de 2001, según el oficio que obra a folio 19.

Por lo anterior, la acción que debió iniciar la apoderada de los demandantes no es otra que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 del CPACA antes 85 del C.C.A., comoquiera que su retiro se produjo en razón a un acto administrativo que contenía esa decisión, debió haber solicitado su reintegro y los demás daños causados a él y a su grupo familiar, dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la notificación del oficio antes mencionado.

Así las cosas, es claro para este operador judicial que la solicitud contenida en este libelo, se encuentra precluida desde el punto de vista de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, circunstancia que impide acudir al de reparación directa para reclamar otra clase de perjuicios, pues precisamente el contencioso subjetivo de nulidad, era la vía adecuada para reclamarlos en vista que se cuestionaba la ilegalidad del acto del retiro que los originó.

Es claro que se encuentra acreditada la caducidad del medio de control propuesta tanto por el Ente Territorial como por Mapfre Seguros, en vista que debió demandarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la decisión de la supresión del cargo, 11 de julio de 2001, y no se hizo, declarándose en consecuencia la terminación del proceso y en por lo tanto el Despacho se abstiene de pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas por las partes demandadas.

#### **FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida decisión, argumentando que debido a la nulidad simple en sentencia de segunda instancia por el Consejo de Estado del acto administrativo esto es el Acuerdo 081 de 2001, se debió entonces analizar los daños acaecidos por este acto general declarado nulo y no como se entendió en aras de controvertir el acto administrativo que configuró el despido del demandante y como se conoce la declaratoria de nulidad se dio con posterioridad al despido del demandante.

Mencionó que, con ocasión a la ilegalidad del acto administrativo dictaminado por el Consejo de Estado, pues esta declaratoria deja a la vista una falla en la función pública, de manera que se encuentra procedente el medio de control de Reparación Directa y efectuada dentro de la oportunidad procesal.

#### **IV. CONSIDERACIONES:**

## 5.1 PROBLEMA JURÍDICO

A la Sala le corresponderá determinar si en el presente asunto se ha configurado la excepción de caducidad.

### PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EN ACTOS ADMINISTRATIVOS:

En principio debe indicarse que, por regla general cuando un daño tiene su origen en un acto administrativo, el medio de control procedente para su reparación es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el cual debe interponerse en un término de 4 meses, contabilizados a partir de la notificación del acto.

Sin embargo, se ha señalado que excepcionalmente es procedente el medio de control de Reparación Directa cuando el daño es causado por un acto administrativo, en los siguientes términos:

*“(...) la reparación directa es la vía procesal adecuada para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de: i) un acto administrativo particular que no sea susceptible de control judicial por haber sido revocado en sede administrativa<sup>1</sup>; o ii) un acto administrativo de carácter general, previa declaratoria de nulidad y siempre que entre el daño y el acto general no medie uno de carácter subjetivo que pueda ser objeto de cuestionamiento en sede judicial<sup>2</sup>, lo que quiere decir que “si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”<sup>3</sup>.*

*Asimismo, la Sección ha señalado que este medio de control -reparación directa- es el mecanismo procesal idóneo para pedir el resarcimiento de los perjuicios derivados de la revocatoria de un acto particular o la nulidad de un acto administrativo de carácter general<sup>4</sup>.”<sup>5</sup>*

De manera que, cuando un acto administrativo de carácter particular que no hubiere sido susceptible de control judicial y hubiere sido revocado, el medio de control procedente es

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998, rad. 13.685, C.P. Daniel Suárez Hernández.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 2003, rad. 23.205, C.P. Alier Hernández Enríquez, y sentencia del 21 de marzo de 2012, rad. 21.986, C.P. Hernán Andrade Rincón.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, rad. 21.051, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2003, rad. 26.437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>5</sup> CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera – Subsección B, C.P. MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, Radicado No. 08001-23-33-000-2016-0889-01(62117). Noviembre 21 de 2018.

la Reparación Directa. Lo mismo se da cuando se declara la nulidad de un acto administrativo de carácter general, sin que entre el daño y el acto no medie uno de carácter particular que pueda cuestionarse en sede judicial.

Ahora bien, frente a los casos en los que se desvincula a un empleado público, es claro que debe demandarse el acto administrativo que afecta directamente al servidor, esto es, el que lo retira del servicio en particular; sin embargo, se han presentado diferentes escenarios en los cuales es distinto el acto que modifica la situación jurídica de la persona. En este sentido, se encuentran las siguientes hipótesis<sup>6</sup>:

- Cuando existe un acto administrativo de carácter general que define la planta de empleos; un acto administrativo que incorpora el empleo y determina a cada empleado; y una comunicación; se debe demandar aquél que incorpora los empleos, pues el mismo es el que extingue la relación laboral de manera subjetiva; por lo que la comunicación en este caso se torna en un acto de ejecución.
- Cuando se expide un acto administrativo de carácter general que establece la planta de empleos, y se expide un oficio dirigido a cada empleado que se va a retirar de la misma; se debe demandar este último, por cuanto se trata del acto que materializó la desvinculación del empleado y extingue la relación laboral. En este escenario también debe demandarse parcialmente el acto general, o solicitarse su inaplicación por excepción de inconstitucionalidad.
- Cuando existe un acto de carácter general que establece la planta de empleos, y en él se concreta la decisión de suprimir el cargo, este es el acto que debe demandarse; y la comunicación en este caso se traduce en un acto de ejecución.

## V. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328<sup>7</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>8</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso.

<sup>6</sup> CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, Radicado No. 76001-23-33-009-2017-00969-01(61117). Junio 21 de 2018.

<sup>7</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>8</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



Radicación : 2017-00125-01  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA  
Accionante : JOSE HOBER RODRIGUEZ ALDANA  
Accionado : DISTRITO SANTIAGO DE CALI

5

Se tiene entonces que la apoderada de la parte demandante considera que no se debía habilitar la caducidad, en vista de que la naturaleza del acto es de carácter general, y por ende es a partir del daño, esto es motivo de la ilegalidad resuelta por la nulidad simple en sentencia de segunda instancia por el Consejo de Estado del acto administrativo el Acuerdo 081 de 2001, de manera que el título de imputación según la demandante es la falla en la función pública (falla del servicio), por lo tanto según la apoderada se tiene que entender que los daños acaecidos por este acto general declarado nulo se cuenta su término de caducidad desde la ejecutoriedad de la Sentencia en mención, esto es el 7 de junio del 2015 y no desde la expedición del Acuerdo 081 de 2001.

No obstante, lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto sí ha operado la caducidad del medio de control por las siguientes razones:

Debe decirse que, el ejercicio del medio de control Reparación Directa por daños ocasionados por un acto administrativo es totalmente improcedente en este asunto, por cuanto la declaratoria del acto general no fue la causante del daño, toda vez que el retiro del servicio de la actora -daño que se pretende sea reparado- tuvo su origen en un acto de carácter particular, el cual era susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Es menester por esta Sala manifestar que el punto de partida no es la declaratoria de nulidad por parte de la sentencia del Consejo de Estado, si no desde la expedición del Acuerdo 081 del 2001, debido a que con ocasión de la expedición del acto administrativo se lesiona un derecho subjetivo, individual, amparado en una norma jurídica, también encuentra la Sala, la incidencia en la fuente del daño, puesto que es precisamente el acto administrativo quien vulnera dicho derecho por consiguiente el medio de control procedente anteriormente expuesto es el idóneo para atacar el acto administrativo ilegal como bien lo dice el CCA aplicable para la época “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.”<sup>9</sup>

Así pues, al esclarecerse que el medio de control procedente en este asunto era el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 136 numeral 2º del CCA aplicable para tal época, la demanda debía haberse interpuesto dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la comunicación del 06 de julio de 2001, la cual se surtió el 09 de julio de la misma anualidad, por lo que el actor contaba hasta el 09 de noviembre de 2001 para acudir a la sede judicial. En este sentido, es claro que para el 18 de julio de 2017, fecha de la presentación de la presente demanda, el medio de control ya estaba caduco, y por ello, se declarará fundada esta excepción.

---

<sup>9</sup> Decreto ley 01 de 1984, CCA

Radicación : 2017-00125-01  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA  
Accionante : JOSE HOBER RODRIGUEZ ALDANA  
Accionado : DISTRITO SANTIAGO DE CALI



6

Por lo expuesto, esta Sala procederá a confirmar el auto apelado.

En consecuencia, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Jurisdiccional de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **R E S U E L V E:**

**PRIMERO. - CONFIRMAR** el auto proferido en audiencia inicial el día 28 de febrero de 2020, por medio del cual el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali decidió declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

**SEGUNDO. - DEVUÉLVASE** al Juzgado de origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Los Magistrados,

**Firmado electrónicamente  
OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT**

**Firmado electrónicamente  
PATRICIA FEUILLET PALOMARES**